

# CRISIS E INSURRECCIÓN EN ARGENTINA 2001\*

Alberto R. Bonnet

## RESUMEN

La masiva insurrección popular de diciembre de 2001 puso fin a la modalidad específica que adoptó la ofensiva del capital en la Argentina de la pasada década; seguramente una de las más profundas de Latinoamérica, centrada en la inserción de la economía en el mercado mundial en condiciones de convertibilidad del peso. Este artículo propone un análisis provisorio de esa insurrección que acabó con la convertibilidad; explica la naturaleza y la dinámica propias de dicha convertibilidad, así como de sus límites, puestos de manifiesto crecientemente durante la depresión económica, la crisis política y la oleada de luchas sociales que se inician hacia mediados de 1998. El análisis de la insurrección popular, por su parte, concluye con la caída de la convertibilidad y de la administración de De la Rúa.

## ABSTRACT

Although the struggles continue, it is already possible to say that the popular insurrection of the December 2001 finished with the neo-liberal model which had ruled in Argentina throughout the 1990s. The massive insurrection put an end to the specific modality that the offensive of capitalism adopted in Argentina in the last decade: surely one of the most profound in Latin America, centred on the insertion of the economy in the world market in conditions shaped by the convertibility of the peso. The aim of this article is to propose a provisional analysis of the insurrection. Nevertheless, first we give a description and brief explanation of the nature and dynamic of convertibility, as well as of its limits, which became increasingly evident during the economic depression, the political crisis and the wave of social struggles which started in the middle of 1998. The analysis of the popular insurrection concludes with the fall of convertibility and the administration of De La Rúa.

\* Este artículo está inspirado en las conferencias y mesas redondas que tuvieron lugar en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (BUAP) el 24 de enero de 2002 y en las facultades de Filosofía y Letras (UNAM) el 29 de enero y 8 de febrero de 2002, y de Economía (UNAM) el 7 de febrero de 2002. Sin las discusiones suscitadas y los aportes volcados por los participantes de estos eventos, verdaderamente, este texto cargaría con muchas más deficiencias.

*A los compañeros asesinados por la  
policía durante las jornadas de diciembre*

## LA CONVERTIBILIDAD

El capitalismo argentino de posguerra se caracterizó porque, en su seno, la lucha de clases se expresaba inflacionariamente. La lucha entre capital y trabajo se expresaba en la forma de escaladas inflacionarias periódicas. Y los procesos hiperinflacionarios de 1989-91 significaron la culminación de ese modo de funcionamiento; constituyeron una feroz ofensiva del capital, un proceso de expropiación extraordinaria, de acumulación originaria reiterada que arrojó a la clase trabajadora, cuyos salarios se esfumaban día a día, al saqueo de supermercados, pero también pusieron en entredicho la continuidad de la reproducción capitalista misma.<sup>1</sup> El establecimiento de la convertibilidad del peso, es decir, la fijación por ley del tipo de cambio, garantizada por la obligación de un banco central independiente de vender dólares de sus reservas a la paridad establecida de uno a uno, significó, por su parte, a comienzos de 1991, un intento de poner fin a dicha dinámica sustrayendo el valor del dinero respecto de la lucha de clases. Este es el intento que clausurará la insurrección popular de diciembre.

Eliminado el recurso de las devaluaciones competitivas y en condiciones de apertura irrestricta de la economía -y, por supuesto, de la desregulación generalizada de los flujos de capitales y mercancías, asociada con la llamada globalización-, la inserción del capitalismo argentino en el mercado mundial impuso una presión constante hacia el incremento de la explotación del trabajo. En efecto, desde la perspectiva de la teoría del valor trabajo, la inserción de una economía en el mercado mundial depende de su competitividad, es decir, de los costos laborales unitarios de las mercancías producidas en su territorio en relación con idénticos costos de las mercancías producidas en el territorio de otras economías.<sup>2</sup> En condiciones de tipo de cambio fijo, esto equivale a decir que dicha inserción depende exclusivamente del salario y de la productividad del trabajo. Pero salario y productividad del trabajo no son, a su vez, sino los dos indicadores del grado de explotación del trabajo o, en los términos de

Marx, de la tasa de plusvalor vigente en una economía. Y es importante advertir que aquí el grado de explotación del trabajo no sólo está determinando la capacidad de inserción de una economía en el comercio internacional sino, asimismo, su capacidad de captación de flujos internacionales de capitales productivos e, indirectamente, financieros. Ese grado de explotación del trabajo determina así, por ende, de conjunto el balance de pagos de la economía en cuestión y, en nuestro caso particular, también la mayor o menor incidencia del servicio de la deuda externa dentro del mismo. La moneda interna, mientras tanto, queda atada a la divisa de referencia, en nuestro caso el dólar, y su valuación afecta a la competitividad de la economía en la medida en que fluctúe el tipo de cambio de dicha divisa de referencia respecto de las monedas de terceras economías con las que la economía en cuestión mantenga relaciones económicas.

La convertibilidad conlleva entonces, como decíamos, una presión constante hacia el incremento de la explotación del trabajo. Esta presión se ejerce inmediatamente sobre los propios capitalistas, que se ven enfrentados a la alternativa de reconversión o quiebra, y los capitalistas descargan a su vez dicha presión sobre los trabajadores, que se ven enfrentados a la alternativa de mayor explotación o resistencia. Los trabajadores, naturalmente, podían optar por la resistencia. Pero el sometimiento a una mayor explotación tendió a imponerse en Argentina como el precio que los trabajadores debían pagar a cambio de la estabilidad, es decir, a cambio de que la burguesía no reiniciara sus expropiaciones hiperinflacionarias. Aquella presión es, precisamente, la matriz del disciplinamiento del trabajo que estuvo en los cimientos de la hegemonía burguesa más o menos sólida, la hegemonía menemista, que signó a la sociedad y a la política argentina durante la década entera de los años noventa.<sup>3</sup> La convertibilidad no puede entenderse entonces, simplemente, en términos de una política antiinflacionaria de estabilización. Debe concebirse también, de manera fundamental, como una política neoconservadora más de disciplinamiento social generalizado.

Pero la convertibilidad desató así una suerte de carrera del peso. En efecto, los tipos de cambio están a su vez determinados por la competitividad de las economías respectivas en el mercado mundial: a las economías

líderes en el mercado mundial corresponden, por lo menos en el largo plazo, tipos de cambio altos.<sup>4</sup> La convertibilidad establecida por ley debía, entonces, refrendarse en el futuro mediante el aumento de la competitividad de la economía argentina en el mercado mundial, justamente a través de un aumento de la explotación del trabajo que la sustentara. Y esta carrera podía desarrollarse en dos senderos diferentes conforme, precisamente, los dos componentes de esa tasa de explotación del trabajo. En condiciones de auge de la economía, en nuestro caso alimentada por el flujo de capitales desde el exterior, dicha carrera dependía de la capacidad de los capitalistas de aumentar la productividad del trabajo, racionalizando la organización y los procesos de trabajo hasta el extremo y, a partir de ese punto, invirtiendo en nuevas tecnologías. Por el contrario, en condiciones recesivas, con un reflujo de capitales externos que desencadena una espiral deflacionaria, dicha carrera depende de la capacidad de los capitalistas de bajar sin más los salarios nominales. (Recordemos que está vedada la posibilidad de reducirlos en términos reales mediante la inflación.) Esa posibilidad de bajar los salarios nominales se ve a su vez potenciada por los altos niveles de desempleo generados en el propio periodo de auge, a través de las reconversiones ahorradoras de trabajo, e incrementados en el periodo recesivo a raíz de las quiebras y reducciones de plantas. El creciente desempleo refuerza de esta manera, junto con la presión de las deudas dolarizadas sobre los consumidores y los inversores endeudados durante el periodo de auge, el disciplinamiento impuesto por la convertibilidad. Esas condiciones de auge y de recesión se ven a su vez sobredeterminadas, como decíamos, por el comportamiento de la divisa de referencia, en nuestro caso, por la revaluación del dólar en relación a otras divisas clave que tiene lugar durante la segunda mitad de los años noventa.

Ambas maneras de correr en la carrera del peso coexistieron durante la década de los noventa. Los periodos de auge estuvieron efectivamente signados por una dinámica de racionalización del trabajo e inversión: precarización de los contratos y condiciones de trabajo, inversiones en nuevas tecnologías y, además, un acompañamiento del Estado neoconservador mediante políticas reaganianas de apoyo a la rentabili-

dad del capital (reducción de aportes patronales a la seguridad social, reformas tributarias regresivas y alicientes varios a la inversión, generación de nuevas oportunidades de inversión rentable a través de privatizaciones). Los periodos de recesión estuvieron signados, por su parte, por la reducción de los salarios nominales y un incremento mayor aún del desempleo, acompañados también por el Estado neoconservador a través de recortes a los salarios públicos. El resultado es una combinación de comportamientos muy disímiles, cuyo saldo previo al inicio de la presente recesión es una tasa de crecimiento anual del PBI de 5.8% y de la inversión anual de 14.6%, pero también un aumento de la productividad del trabajo de al menos 65%, con una caída del salario nominal de 10% y nuevo piso para la tasa de desempleo de 12%.

Ambas maneras de correr en la carrera del peso coexistieron, ciertamente, pero fue la segunda manera la que paulatinamente fue imponiéndose. En efecto, si se analiza la performance de la economía argentina durante el conjunto de la década de los noventa, se advierte inmediatamente que las recesiones fueron cada vez más profundas y prolongadas, hasta conducir a la depresión extraordinaria de nuestros días. La convertibilidad registró tres recesiones durante la década: una desaceleración entre el segundo trimestre de 1992 y el primero de 1993, una desaceleración seguida de recesión entre el primer trimestre de 1994 y el tercero de 1995 y la prolongada depresión que se inicia en el tercer trimestre de 1998 y se prolonga hasta nuestros días. Estas recesiones fueron cada vez más duraderas: un año y dos años aproximadamente, las dos primeras, y el récord de más de tres años y medio en el caso de esta última. Y fueron cada vez más severas: el producto y la inversión anuales crecieron un 0.6%, un 4.3% en el primer caso, cayeron un 10% y 30% durante los peores momentos en el segundo caso y, hasta donde poseemos datos, superaron ampliamente estas caídas durante la depresión en curso.

## LA RESISTENCIA

Describimos hasta aquí muy sintéticamente la naturaleza y la dinámica propias de la convertibilidad. Hasta ahora estamos, en otras palabras,

ante la inercia de los mecanismos de explotación y dominación del capital en condiciones de convertibilidad. Pero esto no es suficiente para explicar el derrumbe de la convertibilidad. ¿Por qué el peso perdió finalmente su carrera?, ¿por qué esta segunda manera de correr la carrera del peso, que fue imponiéndose poco a poco, condujo hacia una crisis irreversible y hacia el derrumbe de la convertibilidad?

Responder a estas preguntas exige que nos desplacemos respecto de la perspectiva que adoptamos hasta ahora. En efecto, el mantenimiento de la convertibilidad, aun en condiciones recesivas, siempre es posible. Desde una perspectiva económica tradicional, como decíamos, siempre puede continuarse con la carrera del peso mediante una ofensiva cada vez más feroz del capital contra el trabajo, reduciendo salarios nominales y generando altísimos niveles de desempleo. El éxito de una ofensiva semejante podría postularse así en términos de una reducción de los costos laborales unitarios a un nivel equiparable, digamos, al vigente en otras economías comparables de Latinoamérica o del Sudeste Asiático. Pero ese mantenimiento de la convertibilidad encontró, afortunadamente, un límite mucho más cercano a nuestra supervivencia; como se supo en las calles durante las movilizaciones, "el límite del ajuste está en la resistencia de los ajustados".

Este límite, la resistencia del trabajo, fue poniéndose de manifiesto crecientemente durante la prolongada depresión que atraviesa la Argentina. La economía de este país, en verdad, nunca se recuperó de las consecuencias de la recesión iniciada en el Sudeste Asiático hacia mediados de 1997, recesión que se extendió más tarde hacia otros de los llamados "mercados emergentes" (recuérdense las crisis rusa y brasileña) y arribó hacia la segunda mitad de 1998 al Río de la Plata. La brusca desaceleración del crecimiento durante el segundo semestre de 1998 redujo a 2.1% el aumento del producto de ese año. Pero esta desaceleración se convertiría en depresión abierta en 1999, con una caída del producto de 5.1%.

La recesión no condujo inmediatamente al derrumbe de la hegemonía menemista, pero se expresó enseguida de manera política. El periodo de la administración de Menem posterior a la renuncia del ministro de Economía que había impuesto la convertibilidad, Domingo Cavallo, significó

así un punto de inflexión. Este periodo de ocaso de la administración de Menem, con R. Fernández a cargo de la Economía, se conoció en nuestro medio como el tiempo de la política en "piloto automático", esto es, mantenimiento de la convertibilidad a rajatabla mediante una dinámica de ajustes permanentes. La conflictividad social comenzó entonces a intensificarse. La coyuntura de mediados de 1999 estuvo signada, en efecto, por una serie de conflictos protagonizados por los productores agropecuarios agobiados por las deudas y los peajes (paros y cortes de ruta en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro y otras provincias), por los docentes, con sus reclamos salariales (paros y montaje de la "carpa blanca" en Plaza Congreso) y por los desocupados, que exigían subsidios de desempleo (cortes de ruta y movilizaciones en Tierra del Fuego, Neuquén, San Luis, Corrientes y otras provincias). Y el desprestigio de la administración de Menem resultante signó la derrota del Partido Justicialista en las elecciones presidenciales de octubre de 1999. Sin embargo, el triunfo electoral de la Alianza -un acuerdo entre la vieja Unión Cívica Radical (UCR) y un nuevo agrupamiento de discurso centro-izquierdista llamado FREPASO- y el recambio de administraciones no significó que la hegemonía menemista, estructurada alrededor de la convertibilidad, se hubiera desestructurado. La hegemonía social y política menemista seguía en pie: los votantes habían decidido en las urnas, simplemente, que los administradores aliancistas podían ser mejores garantes de la convertibilidad que los justicialistas que la habían instaurado. Y la administración de De la Rúa y su primer ministro de economía, J. L. Machinea, demostrarían cabalmente estar comprometidos con el mantenimiento de esa convertibilidad, tanto durante la campaña electoral como desde el primer momento de su asunción.<sup>5</sup>

El ropaje discursivo centro-izquierdista que la Alianza había vestido durante su campaña y que no comprometía sino a un marco más prolijo -una versión de las reformas de segunda generación del Banco Mundial- para ese mantenimiento de modelo neoliberal vigente, se desprendió rápidamente. En efecto, su primera iniciativa política importante, la promulgación de una ley de reforma laboral que profundizaba y legalizaba los niveles de precarización de los contratos y condiciones de trabajo

alcanzados por la administración menemista, se aprobó en el Congreso a cambio del pago de comisiones a los parlamentarios. El cuerpo desnudo de la Alianza, el mantenimiento del modelo neoliberal, se puso en descubierto con idéntica premura. El citado ministro de Economía, supuestamente heterodoxo, demoró apenas unos días en retomar la carrera del peso en piloto automático. Y sumó tres grandes ajustes a los impuestos por su antecesor menemista: un paquete de 3 700 millones de dólares que incluía un impuestazo a los sectores populares en diciembre de 1999, un recorte de 12 a 15% de los sueldos públicos que implicó otros 600 millones de dólares de ajuste en mayo de 2000 y, finalmente, un recorte de gastos del presupuesto 2001 por otros 700 millones de dólares. La política económica de la administración aliancista podía definirse durante ese periodo como una política consistente en ajustar y esperar que la recuperación de la economía, por así decirlo, cayera del cielo. Pero nada cayó del cielo; la recuperación apenas pudo vislumbrarse durante el año 2000, que arrojó un crecimiento de 0.6% del producto, para alejarse como nunca antes durante el 2001, que estaría cerrando, según datos provisorios, con una caída de 3.6% de dicho producto.

Tras una tregua entre septiembre de 1999 y mayo de 2000 -durante la cual se desarrollaron las campañas y las elecciones presidenciales, el recambio y la asunción de la administración aliancista- las luchas sociales volvieron a intensificarse. Se sucedieron por entonces los dos primeros paros generales -los paros del 5 de mayo, del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y del 9 de junio, del MTA, la CTA y la Confederación General del Trabajo (CGT)- contra la política del nuevo gobierno, en particular contra su proyecto de desregulación de las obras sociales. Los docentes y otros trabajadores del Estado, por su parte, llevaron adelante varios paros y movilizaciones de mayo a julio en respuesta a los ajustes de sueldos públicos y de presupuesto educativo. Y los desocupados reiniciaron los cortes de ruta en el interior (Salta, Corrientes). Si se examina la evolución de los conflictos retrospectivamente puede advertirse que una tregua como la que acompañó la transición nunca se reiteraría. Ese nuevo periodo de conflictos iniciado hacia mediados de 2000 sería el que culminaría en la insurrección de diciembre.

En efecto, desde mediados de 2000, y particularmente entre octubre de 2000 y marzo de 2001, las luchas sociales se multiplicaron y registraron importantes avances. Los desocupados se ubicaron a la cabeza de esas luchas, multiplicando los cortes de ruta en el interior (Jujuy, Salta, Chubut, San Juan) y realizando durante una semana, a fines de octubre de 2000, un avance decisivo: la primera serie de cortes de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires situados a lo largo del cinturón industrial que la rodea. A estos primeros cortes de los accesos a la capital se sumarían otros nuevos en noviembre y diciembre. Se registraron, además, las primeras grandes acciones de lucha conjunta entre trabajadores empleados y desempleados: el tercer paro general contra el gobierno (sostenido por el MTA, la CTA y la CGT, durante 36 horas, los días 23 y 24 de noviembre) fue acompañado también por cortes de ruta y ollas populares organizadas por los desocupados.

A fines de 2000, como contrapartida, comenzaba a vislumbrarse ya la culminación de la crisis económica -el *default* y el colapso financiero- y de la crisis política de la nueva administración -la desintegración de la Alianza y su gobierno-. En octubre había renunciado el vicepresidente, Alberto Álvarez, y el resto de los funcionarios del gobierno provenientes del FREPASO comenzaron a retirarse o a ser desplazados de los cargos relevantes. Dentro de la propia UCR, por su parte, las disputas internas se intensificaban con cada nuevo fracaso del gobierno y el sector encabezado por De la Rúa se encontraba en una situación de creciente aislamiento. La Alianza, en otras palabras, se estaba desintegrando. Las relaciones del gobierno con el PJ, que desde el comienzo había brindado un apoyo parlamentario decisivo a sus principales iniciativas, sufrían las presiones que los permanentes ajustes presupuestarios desataban sobre las provincias gobernadas por justicialistas. Más aún; incluso el sólido bloque hegemónico que la burguesía había consolidado alrededor de la convertibilidad comenzaba a mostrar sus fisuras. La debilidad política del gobierno era creciente.

También hacia fines de 2000, el Estado entraba en un virtual *default* de su deuda externa. Los propios inversores financieros sancionaban esta insolvencia imponiendo a la emisión de nuevos títulos tasas de interés que significaban, de hecho, la interrupción de todo financiamiento externo. El

denominado "riesgo país" comenzó entonces su ascenso incontenible.<sup>6</sup> Los organismos financieros internacionales, por su parte, comenzaron a evaluar la posibilidad de que una Argentina en *default* se convirtiera en epicentro de una nueva crisis financiera global. La negociación en diciembre del denominado "blindaje", un verdadero salvataje *avant-la-lettre*, puso de manifiesto privilegiadamente esta situación de inminente crisis financiera.<sup>7</sup>

Sin embargo, los efectos inmediatos del blindaje sobre aquellas tasas de interés se diluyeron ya durante los primeros meses de 2001. Hacia marzo, las políticas de ajuste y el blindaje de Machinea se habían agotado y se impuso la necesidad de un nuevo ajuste mucho más profundo y, por cierto, de un nuevo ministro que lo implementara. Un auténtico *Chicago boy*, R. López Murphy, fue convocado así para imponer un ajuste sin precedentes: un recorte de unos 2 000 millones de dólares para el presupuesto en ejecución y de otros 2 500 millones para el presupuesto del año entrante; recortes que afectarían particularmente a los fondos educativos y provinciales. Pero una extraordinaria oleada de luchas sociales acabó tanto con el ajuste como con el ministro. Nuevos cortes de ruta y paros docentes culminaron en las movilizaciones y la cuarta huelga general lanzadas por el CTA, MTA y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) el 20 de marzo. Después de menos de tres semanas en funciones, el nuevo ministro de Economía renunciaba. Este acontecimiento adquiere recién hoy, visto retrospectivamente, su verdadera importancia: la caída del ministro en marzo sería una suerte de "ensayo general" de la caída del ministro que lo reemplazaría y del propio gobierno en la insurrección de diciembre.

El retorno del ex ministro de Menem, Cavallo, al Ministerio de Economía significó un nuevo punto de inflexión. En efecto, Cavallo reasumió el ministerio a la cabeza de un nuevo partido de derecha, Acción por la República, y dotado de amplios poderes por el Parlamento. Esto significaba un intento de reformulación de la alianza gobernante mediante el reemplazo del FREPASO por el mencionado partido de derecha. Una serie de cambios en otros ministerios ratificarían este intento. Y significaba también que el gobierno estaba realizando su última apuesta en aras del mantenimiento de la convertibilidad, recurriendo al prestigio que su mentor aún conservaba entre amplios sectores de la población, por una parte, y

entre el *establishment* financiero, por la otra. El momentáneo retroceso de las luchas sociales registrado entonces, aunque breve, puso en evidencia que la hegemonía construida en torno a la convertibilidad aún no se había desintegrado completamente.

Pero ese retroceso fue breve. Cavallo anunció inicialmente una serie de medidas de política económica contradictorias e incluso confusas, que propagandizó como un programa heterodoxo de recuperación económica. Los llamados "planes de competitividad" (es decir, subsidios a los exportadores) y la "ampliación de la convertibilidad" (la incorporación del euro a la convertibilidad, que implicaba un periodo de "empalme" con un tipo de cambio devaluado para esos exportadores) fueron las más importantes. Sin embargo, muchas de estas medidas nunca llegaron a implementarse y, en definitiva, Cavallo retomó enseguida el curso de los ajustes permanentes -un nuevo impuesto al cheque en mayo, un recorte presupuestario en junio y, finalmente, la denominada "ley de déficit cero" en julio- y debió negociar una reestructuración de deuda externa -el llamado "megacanje", un masivo canje de títulos que ponía nuevamente en evidencia la situación de *default* y crisis financiera inminente.<sup>8</sup>

La mencionada ley de déficit cero, una medida destinada a demostrar disciplina fiscal ante los acreedores externos, es particularmente relevante en este contexto. En efecto, la supresión del déficit público primario implicaba un recorte móvil de salarios nominales del sector público y de jubilaciones, fijado inicialmente en el 13%, la supresión de los incentivos y otras partidas complementarias destinadas a sueldos en la educación, recortes en los subsidios de desempleo y los presupuestos provinciales, etc. Este nuevo ajuste es particularmente relevante, decimos, porque desataría la oleada final de luchas que culminó en diciembre con el derrumbe de la convertibilidad. La resistencia de los ajustados se mostraría así, de hecho, como el límite del ajuste.

#### LA CRISIS Y LA INSURRECCIÓN POPULAR

La resistencia, en efecto, se intensificaría extraordinariamente desde el lanzamiento de este último ajuste. El retroceso momentáneo de las lu-

chas sociales posterior a la reasunción de Cavallo, a fines de marzo, ya se había cerrado hacia mediados de mayo. A la prolongada huelga, las movilizaciones y los cortes de pistas de aterrizaje de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas se sumaron los cortes de rutas de pequeños productores agrarios del interior (productores de manzanas de Neuquén, de yerba mate de Misiones) y nuevos cortes de ruta de desempleados. La CTA y el MTA, por su parte, lanzaron la quinta huelga general (8 de junio). Pero el impulso decisivo para esta nueva oleada de luchas sociales provendría un poco más tarde del movimiento de desocupados. A fines de junio se reunió un primer encuentro nacional de organizaciones de desempleados donde las distintas agrupaciones acordaron lanzar un plan de lucha escalonado que incluyera a las principales ciudades del país. El plan se materializó en sendas jornadas de cortes de ruta, de 24 y 48 horas, durante las dos primeras semanas de julio, la última de las cuales fue acompañada por un paro de la CTA. Esta organización, el MTA y la CGT lanzaron por su parte la sexta huelga general durante la semana siguiente (19 de julio). Los desocupados reiniciaron su plan de lucha escalonado con tres nuevas jornadas de cortes de ruta, de 24, 48 y 72 horas, durante la última semana de julio y las dos primeras de agosto; la última de las cuales culminó en una masiva movilización a Plaza de Mayo. Los docentes, mientras tanto, llevaban adelante una prolongada huelga activa acompañada de numerosas clases públicas y marchas, y los trabajadores públicos de otras dependencias se sumaban a las movilizaciones.

Este nivel de conflictividad alcanzado en julio y agosto carecía de precedentes, por lo menos durante la década de los noventa. Hacia fines de agosto, sin embargo, se registraría un nuevo retroceso, que se prolongaría hasta comienzos de diciembre. Por cierto, durante ese lapso se realizaron las elecciones parlamentarias, pero ese retroceso momentáneo de las luchas sociales no parece poder explicarse como una tregua característica de los periodos electorales. En las elecciones de octubre se expresaron la crisis y el auge de la resistencia social, naturalmente, pero se expresaron en la forma de una negativa a votar generalizada y de un incremento de los votos obtenidos por los partidos de izquierda. El ausentismo, que ya venía creciendo en elecciones previas, alcanzó 26.3%. Más

significativamente aún, los votos en blanco e impugnados sumaron 21.1%. El "voto bronca", como bautizaron a este fenómeno los medios de comunicación, se constituyó así en la primera fuerza electoral. La UCR fue ampliamente derrotada en las urnas, en consecuencia, pero el PJ triunfante alcanzó menos votos de los que había obtenido cuando fue derrotado en las elecciones previas. Los partidos de izquierda en su conjunto, por su parte, triplicaron sus votos y alcanzaron varios cargos parlamentarios.<sup>9</sup>

En resumen, el descrédito sufrido por los partidos tradicionales era tan generalizado que, en la conciencia de amplios sectores de la población, las elecciones habían pasado, de ser un medio para escoger nuevos representantes que modificaran el curso político, a ser una ocasión más para manifestar su repudio. El resultado de las elecciones podía resumirse en un *¡que se vayan todos!* anticipado. El retroceso de las luchas sociales registrado durante ese lapso, en cambio, respondió más bien a una momentánea desmoralización respecto de los resultados alcanzados a través de la oleada de luchas sociales de julio y agosto. El ajuste del déficit cero no había podido ser derrotado. El gobierno, acorralado por la resistencia, había empleado todos sus mecanismos de presión discursiva y represiva: había intentado aislar la resistencia de los trabajadores públicos cargando sobre sus supuestos "privilegios" la responsabilidad de la crisis, aislar los cortes de rutas de los desempleados amenazando con reprimir si no permitían la circulación de vehículos, etcétera.

Sin embargo, la situación volvió a modificarse desde comienzos de diciembre. La crisis económica y política no había retrocedido sino que, más bien, se había profundizado. La crisis financiera, en un marco de moneda convertible, se expresa como crisis bancaria. Las fugas de depósitos y de dólares al extranjero por parte de los grandes especuladores habían ya alcanzado la suma de unos 15 000 millones de dólares durante el año, 3 000 millones de los cuales habían abandonado el sistema bancario en noviembre, mientras Cavallo se empeñaba en asegurar que "el valor del peso" y "la intangibilidad de los depósitos" estaban garantizados. El 1 de diciembre se decretó el congelamiento de los depósitos (el llamado *corralito*) por tres meses.<sup>10</sup> Un conjunto de algo más de un millón y medio de pequeños ahorristas, con ahorros inferiores a 25 000 dólares (esto es,

un monto equivalente al precio de un departamento de un ambiente estándar en Buenos Aires, a valores previos a la caída de la convertibilidad) que representaban casi 80% de los depósitos, quedaba así imposibilitado de disponer de su dinero.<sup>11</sup> Se trataba de ahorros acumulados durante largos años de trabajo, percibidos en concepto de indemnización por despido, provenientes de la venta de alguna propiedad, cuyo interés en muchos casos ayudaba a sobrevivir a las familias mientras se reinsertaban en el mercado de trabajo o complementaban sus misérrimas jubilaciones. Y las restricciones afectaban asimismo a las cuentas de sueldos. La brutal iliquidez generada por la medida profundizaba entonces la caída del consumo, que afectaba particularmente a los pequeños comerciantes que operan en efectivo, y la precariedad de los trabajadores *en negro*, que perciben su salario en efectivo. Pero tampoco retrocedía la amenaza de *default* de la deuda externa. Cavallo concretaría en diciembre la primera fase de un nuevo canje de títulos de la deuda externa por un monto récord de arriba de 50 000 millones de dólares, mientras el riesgo país ascendía a entre 3 300 y 3 500 puntos básicos.<sup>12</sup>

Este congelamiento de depósitos dispararía, en gran medida, la movilización de los denominados "sectores medios". Durante la primera semana de diciembre se multiplicaron el malestar y las protestas de la gente que acudía a los bancos, y la CTA, el MTA y la CGT convocaban a su séptima huelga general. El 11 y 12 de diciembre, pequeños comerciantes lanzaron sus primeros apagones y *cacerolazos* en la capital, el Gran Buenos Aires, Rosario y otras ciudades del interior. La huelga por 24 horas del 13 de diciembre, por su parte, sería muy significativa porque tal vez haya sido la más masiva registrada durante el periodo y porque contó con una amplia adhesión de esos sectores medios.

Mientras tanto, la crisis y las presiones en el sentido de un ajuste aún mayor se intensificaban. Cavallo negociaba así el desembolso de créditos pendientes con el FMI, a cambio de un nuevo recorte de entre 3 000 y 4 000 millones de dólares para el presupuesto de 2002, pero los funcionarios del FMI retaceaban su apoyo porque dudaban de la capacidad política del gobierno de imponer semejante ajuste. El gobierno, en efecto, no contaba siquiera con el apoyo parlamentario de la UCR y el PJ para implementar dicho

ajuste, renuentes al verdadero suicidio político que implicaba. El gobierno postergaba entonces el pago de las jubilaciones y amenazaba con aumentar el porcentaje del recorte de sueldos y con suprimir los aguinaldos, mientras el riesgo país superaba su nueva frontera de los 4 000 puntos.

El 15 de diciembre tuvieron lugar los primeros copamientos de supermercados: un Carrefour del Gran Buenos Aires fue asaltado por una organización del movimiento de desempleados y, durante varios días, se sumaron otros grandes supermercados de Mendoza y Rosario. El 17, nuevamente, comerciantes y vecinos de la capital y el Gran Buenos Aires se manifestaron y cortaron calles. El 18 se reiteraron los asaltos a los supermercados del Gran Buenos Aires y la guardia de infantería comenzó a custodiar los accesos a los mismos.

Ya estaban presentes entonces todos los componentes de la insurrección popular que acabaría con la administración, la convertibilidad y la propia hegemonía menemista. El 19 de diciembre se generalizaron los copamientos a los grandes supermercados (Capital y Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro), con enfrentamientos con la policía, muertos y numerosos heridos y detenidos. En respuesta, todos los ministros, incluido Cavallo, presentaron sus renuncias y De la Rúa decretó el estado de sitio. Pero la respuesta popular a la suspensión de las garantías constitucionales, lejos del terror que acaso hubiera podido preverse habida cuenta de la tradición de golpes de estado y de dictaduras militares genocidas que pesa sobre el pueblo argentino, fue un aumento de la resistencia. Las masas se movilizaron hacia los centros de los distintos barrios en un *cacerolazo* y, poco a poco, avanzaron sobre la Plaza de Mayo, desafiando al estado de sitio y al gobierno. Tampoco los enfrentamientos con la policía en Plaza de Mayo acabaron con la movilización. Una vanguardia de los movilizados enfrentó a la policía e incendió el Ministerio de Economía y otros edificios públicos, mientras que el resto se replegó hacia Plaza Congreso. El 20 sería la jornada de resistencia más radicalizada. Miles de manifestantes ocuparían el centro de la Ciudad de Buenos Aires, acercando los *piquetes* al corazón de la *city* financiera, atacando los edificios de los bancos, las empresas privatizadas, las oficinas públicas, los MacDonaldis y otros tantos símbolos del

poder, enfrentándose a la policía con piedras, palos y bombas molotov, con nuevos muertos, heridos y detenidos. Y un nuevo *cacerolazo* se sucedió en la noche, pero para festejar esta vez la caída del gobierno.

#### ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

La crisis económica y la oleada de luchas sociales que atraviesan a la Argentina son procesos que continúan desenvolviéndose en el momento en que escribimos estas líneas y, más aún, que no parecen siquiera haber menguado. Sin embargo, a un riesgo importante de equivocarnos, creemos posible avanzar en alguna medida hacia consideraciones menos descriptivas y explicativas, hacia consideraciones acerca de la naturaleza, los alcances y limitaciones, y las proyecciones de esta insurrección de diciembre.

1. Comencemos con un análisis de los sujetos sociales intervinientes. En los sucesos de diciembre confluyeron de hecho varios sujetos sociales que se habían consolidado como tales durante, cuando menos, la segunda mitad de la década de los noventa. Los altos niveles de desocupación y subocupación generados por la convertibilidad, que sumados afectaban a más de un tercio de las mujeres y los hombres en condiciones de trabajar, combinados con una incapacidad del Estado para implementar un verdadero sistema de subsidios de desempleo que se incrementaba con cada nuevo ajuste, sustentaron la emergencia y la creciente organización y combatividad del movimiento de trabajadores desocupados (MTD). El llamado "movimiento piquetero" es, seguramente, uno de los fenómenos más interesantes y originales de la Argentina contemporánea y jugaría un papel clave en la insurrección de diciembre, en particular en sus momentos de mayor radicalización. Se trata, en cuanto a su origen social, de un movimiento de desocupados emergente de la destrucción de puestos de trabajo resultante de la privatización de empresas públicas, en un comienzo, y de la propia reconversión de empresas privadas, más adelante, y que fue consolidándose durante la segunda mitad de los noventa. Desde el punto de vista organizativo está compuesto por una diversidad de organizaciones locales, sean barriales o poblacionales, que en algunos casos fueron integrándose a movimientos nacionales (la Corriente Clasista y Combativa,

la Federación de Tierra y Vivienda-CTA) y, hacia fines de 2001, terminaron coordinándose a escala nacional (en las Asambleas Nacionales de Organizaciones Territoriales, Sociales y de Desocupados, los llamados "congresos piqueteros"). Estas organizaciones y sus congresos funcionan a través de una democracia directa asamblearia, aunque militantes independientes o pertenecientes a partidos de izquierda (maoístas del PCR, trotskistas del PO, etc.) o a sindicatos (el CTA) suelen desempeñar un papel importante. Naturalmente, algunas organizaciones (como el MTD-Solano) son más radicalizadas que otras (como el MTD-La Matanza). Las organizaciones descansan normalmente sobre la percepción de los subsidios de desempleo y la decisión colectiva acerca de su uso, pero también sobre el tejido de una red amplia y polifacética de actividades autoorganizadas (ocupación de tierra, trabajo comunitario, trueque, comedores y guarderías, talleres de formación, etc.). El eje de su modalidad de lucha se encuentra, por supuesto, en el *piquete*. Los primeros piquetes tuvieron lugar, hacia 1996, en una serie de importantes rutas del interior que comunican el Mercosur (Cutral-Có y Plaza Huincul en Neuquén, Tartagal y General Mosconi en Salta, Ledesma en Jujuy) y se nutrieron de los trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo debido a las privatizaciones y de sus familias. Pero paulatinamente los piquetes fueron avanzando hasta terminar cerrando los accesos a la capital desde el Gran Buenos Aires y volcándose a las calles de la propia *city* financiera porteña. La modalidad de lucha del movimiento piquetero está signada, así, por su espacialidad: impedidos de detener la producción, los trabajadores desocupados se ven obligados a interrumpir la circulación.<sup>13</sup> Pero también la acción directa más radicalizada, cuyo antecedente más lejano se encuentra en el "santiagazo" (los ataques a las sedes de los tres poderes de Santiago del Estero a fines de 1993) y otras "puebladas" (La Rioja en 1993, Salta y Jujuy en 1994, etc.). Las acciones del movimiento piquetero, por cierto, no dejaron de incrementarse y de acercarse a la Ciudad de Buenos Aires durante el periodo que consideramos y fueron un componente decisivo de la insurrección de diciembre.<sup>14</sup>

Los trabajadores del sector público ya habían desarrollado importantes jornadas de lucha a comienzos de los años noventa, es decir, durante

el periodo de la administración menemista en que tuvieron lugar la mayor parte de las privatizaciones. A pesar de la derrota impuesta por el menemismo a estas luchas, los trabajadores públicos, principalmente los nucleados en la CTA, volverían a protagonizar importantes jornadas de lucha durante el periodo que nos interesa. Los trabajadores del Estado fueron las víctimas más inmediatas de los sucesivos ajustes, puesto que implicaban reducción generalizada de sus salarios, supresión de otros de sus ingresos parasalariales (caso del sistema de incentivos docentes), deterioro de sus condiciones de trabajo (en escuelas, hospitales) y despidos (como en el caso de empleados públicos provinciales). Desde luego, los ajustes también afectaron a los trabajadores del sector privado, aunque de manera más indirecta: a través del recorte de los servicios sociales y, menos perceptiblemente, quizá, a raíz de que la reducción de los sueldos públicos potenciaba la ofensiva que las patronales privadas venían desarrollando desde comienzos de la recesión hacia la reducción de salarios en el sector privado. Sin embargo, golpeados por el desempleo y por la precarización de los contratos y condiciones de trabajo durante toda una década y sometidos a las centrales sindicales más burocráticas y comprometidas con las políticas neoconservadoras de los sucesivos gobiernos (la CGT y, aunque en menor medida, el MTA), no intervendrían decisivamente, de manera organizada, en la insurrección de diciembre. Precisemos esto. Los trabajadores del sector privado intervendrían a través de las huelgas generales y las movilizaciones organizadas por esas centrales sindicales, que presionaban así para negociar a continuación con el gobierno, la Iglesia, los empresarios y los partidos del régimen un "acuerdo nacional" que preservara la gobernabilidad. (Esas centrales sindicales terminarían apoyando incondicionalmente a Rodríguez Saá como presidente interino justicialista, en reemplazo de De la Rúa, quien sería derrocado por nuevas movilizaciones apenas una semana después de haber asumido.) E intervendrían individualmente, desde luego, en los copamientos de los supermercados, las movilizaciones o los enfrentamientos con la policía. Sin embargo, no pudieron intervenir organizadamente de manera más decisiva, por ejemplo, a través de la ocupación de fábricas, como en otras ocasiones de la historia argentina.

Los denominados "sectores medios", finalmente, desempeñarían un papel decisivo en la insurrección, pero su análisis es mucho más complejo. Una parte de esta complejidad deriva, naturalmente, de que esos sectores no son una clase social, sino un agregado de individuos provenientes de distintas clases que comparten cierto nivel de vida y ciertos valores culturales e ideológico/políticos. Una parte importante de esos sectores medios está integrada por trabajadores asalariados (profesionales, técnicos, académicos) en condiciones relativamente mejores que otros trabajadores del sector público o privado. Y en tanto tales, fueron afectados por los sucesivos ajustes, por el desempleo, las reducciones de salarios, los recortes de gastos sociales, de una manera semejante al resto de los trabajadores. Pero hay algunas condiciones más específicas. Puede decirse que, en primer lugar, los ingresos de estos sectores medios habían sido particularmente afectados por algunas medidas incluidas en los últimos ajustes, como los impuestos al consumo o los recortes de sueldos por encima de cierto monto. En segundo lugar, la propia recesión había afectado masivamente a un sector importante de dicha clase media: los pequeños comerciantes, los cuentapropistas vinculados a servicios varios, los profesionales independientes. Los sectores medios fueron, en tercer lugar, las principales víctimas del congelamiento de los depósitos. Es así que estos sectores medios, que habían sustentado el triunfo electoral de la Alianza dos años antes, se sumaron espontánea y masivamente a la resistencia con sus *cacerolazos*. Esta modalidad de lucha tenía algunos antecedentes, como el cacerolazo contra Menem de 1999, pero no respondió a ninguna organización previa. (A partir de enero de 2002, mediante asambleas vecinales realizadas en las plazas de los barrios, estos sectores medios comenzaron a organizarse.)

2. Este análisis de los sujetos sociales intervinientes en las jornadas de diciembre nos permite entender mejor las características de la insurrección. En efecto, estos distintos sujetos sociales confluían en la insurrección de diciembre y se expresarían en las distintas modalidades de lucha que se desarrollaron durante la misma.

Los asaltos a las grandes cadenas de supermercados fueron acciones protagonizadas por trabajadores desocupados y ocupados. Sus anteceden-

tes se remontan a 1989, es decir, a los asaltos a los supermercados causados por los despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios resultantes de la hiperinflación. Pero si en aquella oportunidad los asaltos a los supermercados habían sido acciones desesperadas realizadas en un marco de derrota de los trabajadores, en esta nueva ocasión, intervención mediante de las organizaciones de desocupados, se perfiló como un verdadero desafío de la propiedad privada a través de la apropiación directa. El terror que la burguesía y sus representantes políticos desnudaron ante estos asaltos ratifica su verdadera naturaleza. Las grandes corporaciones de medios de comunicación de masas locales (como, por ejemplo, el Grupo Clarín) y extranjeras (como la CNN) y, por otro lado, las intervenciones de grupos de derecha fascistizantes de escasa relevancia, tergiversaron en buena medida la naturaleza de estas acciones. No se trató en absoluto de un "enfrentamiento de pobres contra pobres", es decir, de una oleada de vandalismo dirigida contra toda suerte de locales comerciales y casas de familias. Se trató fundamentalmente del asalto a las grandes cadenas de supermercados propiedad de grandes empresas multinacionales (como Carrefour o Wal Mart) y nacionales (Coto) y, en el caso de moradas familiares, de un avance no concretado sobre los *country-clubs* (barrios cerrados residenciales) de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Los *cacerolazos*, por su parte, fueron la modalidad de lucha privilegiada de los sectores medios y, justamente, fueron más masivos en los barrios característicos de la clase media capitalina (Belgrano, Palermo, Flores, Caballito). Dichos *cacerolazos* serían acciones claves para la caída del gobierno porque pondrían de manifiesto que esos sectores medios, que conservan una importancia y una influencia político/ideológica decisiva en la sociedad argentina y que habían sustentado a la Alianza, retiraban definitivamente su apoyo al gobierno.

Las acciones directas de violencia callejera, desarrolladas particularmente durante la jornada del 20, sin embargo serían las acciones más radicalizadas y sin las cuales el gobierno no hubiera caído. Pero, una vez más, la naturaleza de estas acciones fue tergiversada por los medios masivos, que las presentaron como irracionales actos de vandalismo. Nada más lejos de la verdad. (Y es importante anotar en este sentido que, en

algunas asambleas barriales, los vecinos ya comenzaron a plantear la idea de movilizarse hacia las sedes de estos medios para repudiar sus tergiversaciones.) La violencia ejercida en las calles fue una violencia colectiva, ciertamente de una vanguardia del movimiento, compuesta por piqueteros, estudiantes, miembros de partidos de izquierda y otros militantes sociales, pero de ninguna manera de saqueadores dispersos. Cuando se trató de una violencia ejercida sobre otras personas, se trató siempre de una violencia que tenía a la policía como contendiente y que respondía a la represión y a las provocaciones ejercidas por la misma contra los manifestantes. Cuando se trató de una violencia ejercida contra bienes físicos, se trató casi sin excepción de una violencia notoriamente selectiva ejercida contra los símbolos materiales del poder: los edificios de los bancos privados y públicos que habían expropiado los ahorros, los edificios y vehículos de las empresas de servicios públicos privatizadas y en manos de grandes multinacionales que habían saqueado a los consumidores con tarifas entre las más altas del mundo, los locales de MacDonalds que ya se habían constituido en un símbolo del capital global, los edificios públicos que representaban al Estado.<sup>15</sup>

En la insurrección de diciembre, junto con distintos sujetos y modalidades de lucha, confluyeron también distintas demandas, desde los requerimientos de alimento, pasando por los reclamos de trabajo o de subsidios de desempleo, hasta la exigencia de devolución de los depósitos incautados. Hubo, sin embargo, una consigna que poco a poco fue imponiéndose como punto de convergencia de esas demandas: la exigencia de que renunciaran los responsables del régimen de hambre, desempleo y expropiación vigente. *¡Que se vayan todos!* sería la consigna que iría ganando terreno hasta imponerse casi exclusivamente en la jornada del 27 de diciembre, cuando las masas salieron nuevamente a la calle a exigir con éxito, esta vez, la renuncia de Rodríguez Saá.

3. Revisemos ahora el significado de la insurrección de diciembre, sus alcances, sus limitaciones y las perspectivas que inaugura.

En primer lugar, ya puede afirmarse que la insurrección de diciembre puso fin a un periodo de la lucha de clases en la Argentina: el sombrío periodo de ofensiva del capital que, alrededor del modelo de la

convertibilidad, signó de conjunto la década de los noventa. Las consecuencias de la ofensiva neoconservadora de los noventa (la reforma del Estado, la apertura de la economía, la precarización de los contratos y condiciones de trabajo, el desempleo), naturalmente, siguen presentes y su importancia no puede menospreciarse. Pero la clave de dicha ofensiva, la punta de lanza del modelo neoconservador específico que se impuso en la Argentina, esto es, la convertibilidad del peso, cayó irreversiblemente. Si la convertibilidad había impuesto en 1991 nuevas reglas de juego para el desenvolvimiento de la lucha de clases y una nueva hegemonía, esas reglas de juego fueron cada vez más desbordadas por nuevas luchas sociales y esa hegemonía fue perdiendo sustento entre sectores cada vez más amplios de la población. En pocas palabras, del consenso alrededor de la convertibilidad se había desprendido una masa cada vez mayor de trabajadores desempleados, que no tenían salario cuyo poder adquisitivo conservar, de trabajadores empleados, que veían reducirse sus salarios nominales con cada avance de la crisis, y de sectores medios, cuyos ahorros eran repentinamente expropiados. El derrumbe de la convertibilidad en 2001 inaugura a su vez nuevas reglas de juego para la lucha de clases e incertidumbre acerca de la hegemonía.

En segundo lugar, sin embargo, podemos avanzar mucho más en ese sentido. La caída de la convertibilidad en la insurrección de diciembre constituye indudablemente un triunfo para el conjunto de los explotados y oprimidos del país. Y esta afirmación vale en dos sentidos. En un sentido inmediato porque significó, como decíamos, el cierre de unos de los periodos más reaccionarios de la historia argentina. En un sentido más duradero, porque la experiencia de organización y lucha desarrollada por las masas durante estas jornadas, la confianza en sí mismas en tanto sujeto social capaz de cambiar el curso de los acontecimientos y, más aún, esa prefiguración misma de la libertad por venir que aparece cuando las masas avanzan por las calles y los poderosos huyen, todas estas cosas quedan guardadas celosamente en la memoria colectiva para nutrir las nuevas insurrecciones de hoy y de mañana. Lo primero no significa, naturalmente, que se haya abierto un periodo en que la burguesía y sus nuevos representantes hayan cejado en su ofensiva. La propia caída de la convertibilidad,

es decir, la devaluación del peso, puede constituirse en una nueva expropiación masiva para los trabajadores: el efecto inflacionario previsto inicialmente, del 11%, agregaría cerca de 1.3 millones de pobres nuevos a los 14 previamente existentes en la Argentina. La eventual devolución de los depósitos incautados acarrearía, por su parte, una expropiación de no menos del 50% del valor de los mismos. Y así sucesivamente. Pero sí significa que la inédita ofensiva desarrollada por el capital durante una década entera ha concluido. Y lo segundo implica, complementariamente, que las relaciones sociales de fuerza son ahora mucho menos favorables al capital para relanzar dicha ofensiva, aunque sea por otros medios. Las vacilaciones, las concesiones, las marchas y contramarchas del nuevo gobierno provisional del justicialista E. Duhalde no hacen sino evidenciar que los representantes de la burguesía aprendieron, después de sacrificar dos administraciones, que esas relaciones de fuerza cambiaron. Pero también los trabajadores aprendieron que las relaciones de fuerza se modificaron.

En tercer lugar, la insurrección de diciembre puso en escena, momentáneamente al menos, una nueva fuerza social. Me refiero, por supuesto, a la constitución de una nueva alianza de clases populares entre los trabajadores empleados o desempleados y los sectores medios. Esta alianza no puede asumirse sin más como un hecho duradero. En numerosas ocasiones, durante la década de los noventa, esos sectores medios desempeñaron socialmente un papel conservador, aliándose de hecho con la gran burguesía, y se expresaron política e ideológicamente a través de partidos de centro-izquierda que operaron como valiosos "mediadores evanescentes" de la continuidad del régimen.<sup>16</sup> Téngase en cuenta que, apenas unas semanas antes de la insurrección de diciembre, por ejemplo, la mayor parte de dicha clase media era contraria a los cortes de ruta desarrollados por los piqueteros. Sin embargo, su incidencia social, política e ideológica sigue siendo tan importante en la sociedad argentina que cualquier transformación en un sentido anticapitalista es inconcebible sin una alianza entre los trabajadores y esos sectores medios. Para decirlo en pocas palabras, semejante transformación es impensable bajo la dirección de la clase media, pero también lo es sin la clase media. La insurrección de diciembre e incluso otras acciones posteriores convergentes significan un

extraordinario avance en este sentido. La burguesía argentina, por su parte, es plenamente consciente de esta realidad y, a través de sus representantes políticos, sus intelectuales y sus medios de comunicación, no ahorra esfuerzos para romper esa alianza alcanzada. La consolidación política de esa alianza de hecho es una tarea urgente. Pero la insurrección puso en escena también a una nueva vanguardia. Una vanguardia numerosa compuesta de militantes muy combativos, independientes algunos, pertenecientes otros a los partidos de izquierda, a las organizaciones de desocupados o de derechos humanos, a los sindicatos o a agrupaciones estudiantiles, pero cuya característica compartida es su juventud. Esta vanguardia joven desempeñará, seguramente, un papel protagónico en las luchas por venir.

En cuarto lugar, puede decirse que la insurrección de diciembre fue negativa, es decir, que gritó *¡ya basta!*, que exigió *que se vayan todos*. Pero uno puede preguntarse: ¿qué alternativa propuso?, ¿qué gobierno, qué políticas, qué modelo de economía, de Estado, de sociedad exigió? No puede darse ninguna respuesta simple a estas preguntas. Algunos de los insurrectos reclamaban alimentos o ropa, otros un trabajo o un pequeño subsidio de desempleo, otros que se acabara la corrupción enquistada entre los políticos del régimen o que se fueran los políticos corruptos, otros que se terminaran los ajustes o que se tomaran medidas distintas ante la crisis, otros que renunciara el ministro de Economía y algunos funcionarios más o bien que se fuera el gobierno completo, otros, ciertamente, que se acabara el capitalismo. Algunos reclamos fueron seguramente más masivos que otros. Pero unos posibles programas de reclamos comunes recién comenzaron a ser delineados en asambleas barriales y otras instancias posteriores a la insurrección. Fue en este sentido un movimiento profundamente contradictorio. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos en la evaluación de este rasgo de negatividad propio de la insurrección de diciembre. Los voceros de la burguesía no se cansan, desde entonces, de preguntarse y preguntar retóricamente a las masas, algo inquietos por cierto, acerca de qué gobierno, qué políticas, qué Estado quieren. Pero la pregunta es en verdad un chantaje porque supone implícitamente, en todos los casos, que las masas deben escoger del menú que

la burguesía puso previamente en su mesa. ¿Quieren un gobierno, unos ministros, unos jueces de la UCR o del PJ? ¿Quieren convertibilidad o flotación cambiaria? ¿Quieren que respondamos a la banca y a las empresas privatizadas, o a los esforzados industriales, o acaso a los terratenientes de siempre? ¿Quieren un "Estado mínimo" neoliberal o un "Estado regulador" neopopulista? Pero las masas, con una especie de sabiduría instintiva, siguen guardando silencio. Y ni siquiera se avienen a responder a estas preguntas a través de los canales preestablecidos, es decir, ni siquiera reclaman la realización de elecciones de nuevos representantes. En este sentido, paradójicamente, ese rasgo negativo de la insurrección de diciembre es extraordinariamente positivo: deja abierta una brecha inédita para construir una política independiente de los partidos y los representantes del régimen, para conformar nuevas formas de autogobierno sin ningún gobierno externo, de autoorganización sin ningún Estado, de comunidad, en definitiva, sin comando capitalista.

#### NOTAS

<sup>1</sup> Los procesos hiperinflacionarios a los que me refiero son: el que ocasiona el derrumbe del "plan primavera" y del gobierno de Alfonsín, iniciado en febrero de 1989 y prolongado hasta julio, el que comienza en diciembre de 1989 y termina en marzo de 1990 poniendo fin a los acuerdos de precios del "plan Bunge y Born", y el que empieza a fines de 1990 coronando los meses de grandes conflictos de los "planes Erman" y termina con el lanzamiento del "plan de convertibilidad" en marzo de 1991. El primero es el más grave y, seguramente, el más importante en cuanto a sus consecuencias sociales y políticas: los precios aumentaban a diario (114% en junio y 199% en julio de 1989), la capacidad adquisitiva de los salarios se deterioraba hasta esfumarse (el salario real descendió un 35% acumulado entre abril y julio) y el desempleo se disparaba hasta niveles inéditos (15% en mayo). Entonces masas de trabajadores se vieron obligados a lanzarse al asalto de los supermercados para alimentar a sus familias.

<sup>2</sup> El costo laboral unitario relativo (CLUR) debe entenderse como un compuesto del salario unitario ( $w/L$ ), la productividad del trabajo ( $q/L$ ) y el tipo de cambio ( $r$ ), esto es,  $CLUR = [(w/L) \cdot (q/L) \cdot r]$ . Remito a A. Shaikh: "The laws of international

exchange", en E. J. Nell (comp.), *Growth, profits and property*, Cambridge, Cambridge University Press, 1980; "Foreign trade and the law of value", I y II, *Science and Society*, fall 1979 y Spring 1980, y D. Guerrero: *Competitividad: teoría y política*, Barcelona, Ariel, 1995.

<sup>3</sup> Para una exposición más detallada de estos mecanismos que sustentaron la hegemonía menemista durante los años noventa, véase A. Bonnet, "Argentina 1995: ¿una nueva hegemonía?", en *Cuadernos del Sur* 19, Buenos Aires, 1995.

<sup>4</sup> Remito nuevamente a A. Shaikh, "Real exchange rates and the international mobility of capital", *Working Paper* 265, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, 1999.

<sup>5</sup> Para un análisis más detenido de esta coyuntura véase A. Bonnet, "Saber, creer y votar. 1999: elecciones menemistas", en *Cuadernos del Sur* 29, Buenos Aires, 1999.

<sup>6</sup> La noción de "riesgo país" suele usarse en los medios de comunicación en dos sentidos diferentes. En primer lugar, para designar la cuantía, estimada en "puntos básicos", en que las tasas de interés de los títulos de deuda en cuestión superan a la tasa de interés de algún título de referencia, en nuestro caso los bonos a largo plazo del tesoro de los EUA. Este "riesgo país" depende pura y exclusivamente del precio, tanto menor cuanto mayor es el riesgo de cesación de pagos, al que los especuladores financieros internacionales negocian esos títulos de deuda. En segundo lugar, para designar las evaluaciones del riesgo de cesación de pagos realizadas por instituciones calificadoras de riesgo (*Moody's*, *Standard and Poor's*) y este "riesgo país" depende, obviamente, de los criterios de dichas instituciones. Pero en ambos casos el riesgo país es, en definitiva, una sanción acerca de las condiciones de explotación y dominación del trabajo en un país dado por parte del comando del capital-dinero. Para ampliar acerca de este mecanismo de sanción puede verse: A. Bonnet, "La globalización y las crisis latinoamericanas", en *Bajo el volcán* 3, ICSyH-BUAP, Puebla, 2001.

<sup>7</sup> El blindaje es una "Línea de Crédito Contingente", en términos del FMI, modalidad de crédito implementada por vez primera en este caso. Sumaba supuestamente u\$s 39 200 millones (o sea, el 90% de los pagos de deuda externa a desembolsar en el año 2001 y el 70% de los correspondientes al año 2002). Es importante tener en cuenta que ese crédito contingente provenía de distintos presamistas (un consorcio constituido por el FMI, el BM, el Estado Español, varios

Bancos Internacionales y las AFJPs) y sería desembolsado en distintas condiciones. Su intención era influir a la baja en las altas tasas de interés vigentes, influencia que se constató en lo inmediato pero que se había diluido un par de meses más tarde.

<sup>8</sup> Dicha reestructuración de la deuda implicaba la postergación de vencimientos hasta el 2005 de principal e intereses por unos u\$s 29 500 millones, con una tasa anual de 15%. Implicó un fuerte incremento de la deuda (de unos u\$s 40 000 millones entre principal e intereses) y escandalosas comisiones pagadas a los bancos internacionales intervinientes (BBVA-Francés, Río-Santander, etc., de u\$s 141 millones. Pero apenas unas semanas más tarde, los títulos de deuda de corto plazo pagaban ya tasas de 17 a 21%.

<sup>9</sup> Para un análisis más detallado de estas elecciones, sumamente complejas, véase A. Bonnet, "Elecciones 2001: nadie vota a nadie", en *Cuadernos del Sur* 32, Buenos Aires, 2001.

<sup>10</sup> Se trata de un congelamiento de los fondos depositados en las cuentas bancarias en su conjunto, incluyendo las de sueldos, con un máximo inicial de extracción de u\$s 250 semanales y de giro al exterior de u\$s 1 000. Para entender la naturaleza de verdadera "acumulación originaria reiterada" de este mecanismo a propósito de los ahorros, comparable a la sucedida durante la dolarización en Ecuador y comparable, desde luego, a la inherente a los procesos hiperinflacionarios, remito a W. Bonefeld, "Class struggle and the permanence of primitive accumulation", en *Common Sense* 5, Glasgow, 1988.

<sup>11</sup> Los depósitos en dólares sumaban por entonces 46 400 millones y los en pesos otros 18 400 millones. Para entender esta importancia que habían alcanzado los depósitos nominados en dólares debe tenerse en cuenta que la convertibilidad implica, por definición, una suerte de dolarización velada de la economía: el proceso de "dolarización", es decir, de sustitución de la moneda local por una divisa extranjera, comienza siempre precisamente por el dinero *qua* reserva de valor. Véase en este sentido, entre otros, P. Salama, *La dolarización*, México, Siglo XXI; P. Salama y J. Valier, *La economía gangrenada. Ensayo sobre la hiperinflación*, México, Siglo XXI, 1992; y G. Carchedi, "La dolarización, el señoreaje y el euro", en *Cuadernos del Sur* 30, Buenos Aires, 2000.

<sup>12</sup> Del total de la deuda externa nacional, u\$s 132 000 millones, esa primera fase negociada entre los tenedores locales implicaba 50 759 millones, con un

descenso de la tasa de interés de 9 a 14% en que se situaba al 7%, a cambio de una garantía sobre la recaudación tributaria. El canje total abarcaría u\$s 82 000 millones, 62 000 en títulos nominados en dólares y 20 000 en otras divisas.

<sup>13</sup> En este sentido, pueden inscribirse dentro de un conjunto más amplio de movimientos sociales en cuyas estrategias el manejo del espacio desempeña un papel fundamental, como es el caso del MST de Brasil y el EZLN de México.

<sup>14</sup> En efecto, el número de cortes aumentó permanentemente desde 1997, alcanzando los 252 en 1999, los 514 en 2000 y los 996 hasta septiembre de 2001. Para todo el periodo considerado 30% fueron en el Gran Buenos Aires (592), 12% en la Capital (238), 11% en Jujuy (208), 7% en Neuquén (132), 6% en Tucumán (115) y 5% en Chaco, Río Negro y Salta (de 90 a 100 cortes en cada caso), según datos de E. Lucita, "Cortando rutas, abriendo nuevos senderos", en *Cuadernos del Sur* 32, Buenos Aires, 2001.

<sup>15</sup> Estas acciones directas de violencia callejera pueden equipararse a su vez, en muchos sentidos, a las acciones del denominado "movimiento anti-globalización", de Seattle a Génova.

<sup>16</sup> La noción de "mediadores evanescentes", que emplea Slavoj Žižek para referirse al papel de los disidentes anti-stalinistas durante el proceso de restauración del capitalismo en la ex URSS, se aplica perfectamente al papel de estos partidos de centro-izquierda durante las transiciones entre administraciones signadas por la continuidad de las políticas neoconservadoras. Véase S. Žižek, "Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional", en F. Jameson y S. Žižek, *Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*, Buenos Aires., Paidós, 1998.